

La “nueva” política petrolera *

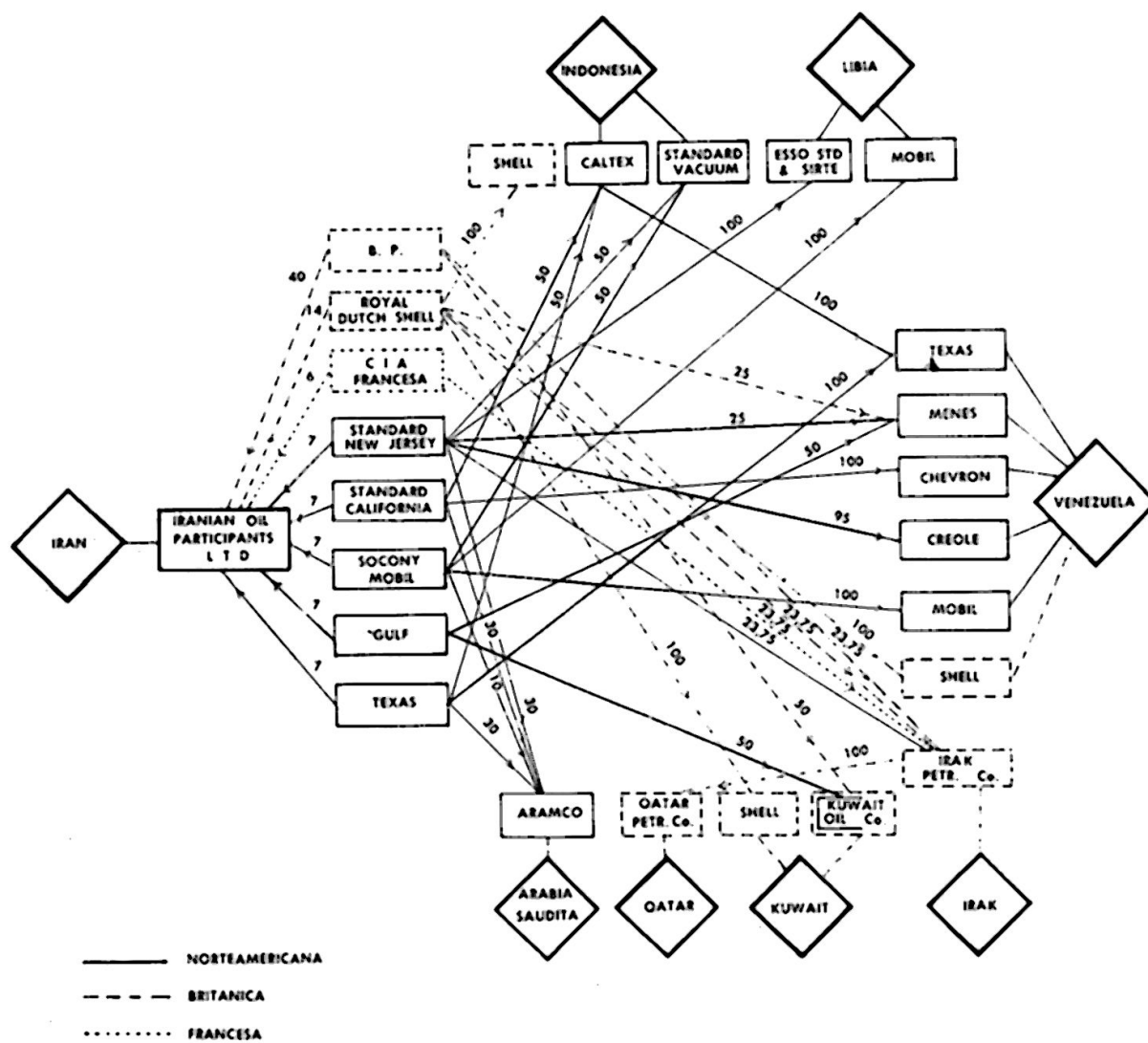
~~SALVADOR DE LA PLAZA~~

~~Profesor Investigador~~

~~Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad Central de Venezuela~~

En los últimos nueve años, el petróleo ha venido ocupando cada vez con mayor intensidad la atención de los venezolanos y no es para menos, pues a través de la prensa, la radio, la televisión, día a día, los agentes de los trusts internacionales petroleros han estado filtrando noticias tergiversadas, comentarios y opiniones alarmistas sobre el futuro de nuestro país, con la finalidad, por una parte, de acondicionar el ambiente que les facilitara la consecución de su objetivo central de conservar y obtener para sí todos los yacimientos petroleros de Venezuela —los en explotación y los aún no localizados— como reservas seguras para el futuro y, por la otra, de ocultar el acrecentamiento de los enormes beneficios que sus casas matrices han estado percibiendo como consecuencia de las rebajas de precios, de la reducción de los costos de producción y de la participación menor, en barril extraído, que ha estado recibiendo la Nación; obstaculizando al mismo tiempo que se realice la aspiración del pueblo venezolano de que la Nación asuma la extracción directa de nuestro petróleo, de su manipulación y venta. No otra explicación tiene la especie corrida por todo el país en días pasados de “que para Venezuela había terminado la época de las vacas gordas”.

* Conferencia dictada por el Dr. Salvador de la Plaza en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, el 18 de julio de 1967.



En ese mismo sentido el doctor Uslar Pietri afirmó en el Senado el 23 de mayo, que

"La situación del petróleo no es la consecuencia de una situación mundial sino producto de una situación nacional... En Venezuela ha ido disminuyendo sus exportaciones debido a la mala política que ha orientado el gobierno, mientras que otros países, como los del Medio Oriente y otros productores han aumentado sus exportaciones...".

no obstante que bien sabido de él, es que la explotación de nuestro petróleo, desde sus comienzos, ha estado controlada por los mismos trusts que controlan la del petróleo de los países del Medio Oriente y, asimismo sabe, que esos trusts disminuyen o aumentan la producción en una de las zonas cuando conviene a sus intereses aumentarla o disminuirla en la otra. Cuando los sucesos de Suez —1956-1957— la producción de Venezuela pasó de los 125 millones de metros cúbicos en 1955, a 161 millones en 1957, es decir, que la aumentaron en 35 millones de M³ y, más recientemente, en los meses de diciembre a marzo pasado, cuando Irak y Siria clausuraron el oleoducto de la "Irak Petroleum", la producción aquí registró una "recuperación". Sabe también el doctor Uslar Pietri que esos trusts controlan tanto los mercados mundiales de crudos y derivados como los transportes, y que, como secuela del existente régimen de concesiones, una vez que el petróleo ha sido extraído del subsuelo y entregado el "royalty"-petrolero al Estado en especie o en dinero por su venta, las compañías concesionarias disponen del resto sin que el Estado tenga ingerencia en su manipulación y venta, salvo tímidas disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos. Y el 8 de junio, como por arte de magia, se desvaneció el "fantasma" de los petróleos competitivos y el no menos amenazante del azufre, al solo anuncio de mister McNamara de que "planes contingentes del Gobierno norteamericano incluyen un abastecimiento adicional de petróleo por parte de las refinerías del Caribe que procesan crudos venezolanos".

Es cierto que desde la Segunda Guerra Mundial no es tan absoluto el control que esos trusts —las "siete hermanas"— ejercían en el negocio petrolero mundial y ello debido a la agresiva incursión en ese negocio del Enti Nazionale Idrocarburi de Italia, a que los trusts japoneses obtuvieron concesiones en países del Medio Oriente y a que el petróleo de Argelia pasó a ser controlado por Francia. Pero también es cierto que todavía los grandes trusts anglo-yanquis acaparan y manipulan el 76,5 por ciento del petróleo que se extrae en el mundo, excluidos México, Argelia, China y la Unión Soviética. Como podrán observar ustedes en este Cuadro elaborado por el profesor Pedro Esteban Mejías, el grupo norteamericano —Standard Oil of New Jersey, Standard California, Socony Mo-

bil, Gulf y Texas—, controlan la mayor parte del petróleo de Venezuela a través de las compañías subsidiarias Creole, Mene Grande, Texas, Chevrone y Mobil; el de Arabia Saudita a través de la Aramco; el de Irán a través de la "Iranian Oil Participation", así como que el grupo inglés —Shell y British Petroleum—, controla el petróleo de Qatar, el de Kuwait, el de Indonesia y la restante parte del de Venezuela. En esa forma se han distribuido las "siete hermanas" los yacimientos de los países que producen el 59,6 por ciento del petróleo que concurre al mercado mundial. Así pues, los aumentos como las disminuciones de la producción, las fluctuaciones de los precios, la desocupación de miles de trabajadores, el deterioro de los ingresos fiscales no tienen en nuestro país una causa interna, responden a las decisiones que en New York y Londres toman los Ejecutivos de esos grandes trusts.

Para nadie es ya un secreto que desde 1917, con el triunfo de la Revolución Socialista en Rusia, se abrió para la humanidad una nueva era, la que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se ha caracterizado por el desmembramiento de los grandes imperios coloniales y el advenimiento a la vida internacional de multitud de pueblos que hasta entonces estaban subyugados y que luchan animosamente por constituirse en naciones económicamente independientes y soberanas. Entre esos pueblos se destaca el árabe, en el subsuelo de cuyos territorios se encuentra depositado el 60,6 por ciento del petróleo hasta ahora localizado en el mundo. La reconquista por Egipto de su Canal de Suez y el estruendoso fracaso de la invasión que Francia, Inglaterra e Israel desencadenaron contra ese país con el fin de arrebatárle de nuevo su Canal, sucesos ambos exponentes de la pujanza que venía adquiriendo el movimiento nacionalista árabe, advirtieron a los trusts anglo-yanquis que estaba llegando a su término la hegemonía que ejercían sobre el petróleo del Medio Oriente y, en consecuencia, que su interés les aconsejaba suplir el violento aumento del consumo mundial con petróleo proveniente de esa región, estabilizando, e incluso reduciendo —"política de conservación"—, la producción en las zonas por ellos considerada como sus reservas para el futuro.

Tal política, acordada en Nueva York y Londres, es la que han venido aplicando los grandes trusts petroleros en Venezuela y en los mismos Estados Unidos. Hasta que tuvieron la evidencia de ese peligro, el incremento del consumo mundial lo habían estado satisfaciendo con el aumento de la producción en uno y otro país. Los Estados Unidos pasaron de país gran exportador de petróleo a país gran importador de petróleo —política de limitación de la producción—, y, en Venezuela, fue declinando el porcentaje de su participación en el mercado mundial, como puede apreciarse en el siguiente Cuadro:

COMERCIO NETO DE PETROLEO Y PRODUCTOS REFINADOS

(EN BARRILES DIARIOS)

	<i>Venezuela</i>		<i>Total mundial</i>
1948	1.285.000	53,56%	2.399.000
1958	2.512.000	35,96%	6.785.000
1960	2.670.000	32,76%	8.150.000
1963	3.073.000	25,54%	12.031.000
1965	3.297.000	21,87%	15.073.000
1966	3.191.000	19,35%	16.488.000

En verdad, el que hubieren sido descubiertos enormes yacimientos petroleros en el Medio Oriente y que para los grandes trusts representare un serio peligro el auge creciente del movimiento nacionalista árabe, benefició a Venezuela en el sentido de que a esos hechos debamos el que los trusts no hubieren extraído para esta fecha todo el petróleo contenido en nuestro subsuelo. El existente régimen de concesiones favorecía que pudiera tener lugar esa catástrofe, tanto más cuanto que la auspiciaban las clases dominantes —las "fuerzas vivas"— con su apetito incontrolado de rápido enriquecimiento y sus ansias de participar cada vez en mayor medida en el reparto de los ingresos petroleros, lo que siempre han ocultado alegando la amenaza que para el petróleo venezolano, como combustible, representaba la energía nuclear. Esas clases se niegan a aceptar que por ser el petróleo un recurso natural no-renovable y de tan múltiples y necesarias utilizaciones por la industria moderna, su verdadero valor no es ya el de un combustible, por lo que su sustitución como tal por la energía nuclear no involucre ningún peligro para el futuro de nuestro país. Un barril de crudo al ser transformado en productos petroquímicos, multiplica su valor cincuenta veces. Si el talar nuestras montañas para convertir la madera en carbón vegetal es considerado por todo el mundo como un crimen, continuar usando el petróleo como combustible es un crimen aún mayor, porque las montañas se resiembran y de nuevo las tendremos —la reforestación es política de conservación de recursos naturales que está a la orden del día en todos los países—, mientras que al petróleo el hombre no puede renovarlo una vez consumido. La energía nuclear no es, pues, una amenaza para el petróleo que aún contienen nuestros yacimientos, como lo pregonan quienes están interesados en que sean otorgadas nuevas concesiones a los trusts y de que éstos lo extraigan lo más rápidamente

posible "antes de que sea tarde". Es, por el contrario, la energía nuclear lo que asegurará a la humanidad contar con petróleo en el futuro para proveer a las industrias petroquímicas y a sus derivadas e incluso, para resolver problemas de alimentación en el mundo. Ya se están produciendo proteínas extraídas del petróleo.

Los trusts anglo-yanquis que mediante el régimen de concesiones se apoderaron de los más ricos yacimientos de hidrocarburos contenidos en nuestro subsuelo, no sólo persiguen que esas concesiones les sean renovadas en 1983, año en que llegan a su término, sino también apoderarse de las "reservas nacionales" que aún tenemos y de los yacimientos que puedan ser localizados, para de esta manera estar seguros de controlar y de disponer de nuestro petróleo y de nuestro gas natural en cualquier contingencia que se les presente y hasta el momento en que nuestros yacimientos queden exhaustos. En esa perspectiva es claro que van implícitas, por una parte, la lucha que entre sí mantienen los dos grupos de trusts en torno al reparto de nuestros yacimientos y mercados y que se exterioriza en diversas formas y, por la otra, su solidaridad actuante en toda gestión, presión o acción que los lleve a obtener para sus respectivas Casas Matrices los más grandes beneficios a base de la reducción de los costos de producción —automatización, despido de trabajadores, etc.— y de una menor participación de la Nación en las utilidades que obtienen mediante las rebajas de los precios, la adulteración de sus declaraciones de renta, etc.

En 1956-1957, en momentos de los sucesos de Suez, los trusts anglo-yanquis se apresuraron a invertir 2.118 millones de bolívares, aparentemente como pago de impuesto inicial de explotación, para obtener concesiones en las áreas que Pérez Jiménez había sacado a licitación, mayormente en las de "reservas nacionales". Esa inversión la han estado amortizando con la consiguiente reducción del Impuesto sobre la Renta, operación que se ha traducido en que aumentaron el área de sus concesiones mediante un disimulado empréstito recuperable a largo plazo. En sus planes estaba repetir la treta. No fue por abundar en argumentos contra la "Corporación Venezolana de Petróleo" que el doctor Uslar Pietri en reciente intervención en el Senado, encuadrara a ese Instituto entre las empresas "parásitas", aduciendo que las utilidades que había obtenido de diez millones de bolívares en 1966, representaban tan sólo el 1 por ciento del capital que en "asignaciones" había recibido del Estado, áreas por las cuales la Nación hubiera podido percibir 1.000 millones de bolívares de haber sido otorgadas en concesiones a los trusts.

Pero, el 19 de diciembre de 1958, tuvo lugar un hecho que los trusts ni siquiera habían previsto: el Decreto de la Junta de Gobierno, presidida

entonces por el doctor Edgar Sanabria, mediante el cual fue elevada la escala del Complementario de la Renta de 26 por ciento a 45 por ciento sobre las utilidades mayores a los 28 millones de bolívares en el año y con vigencia desde el 1º de enero de 1958. El estupor, la indignación, la cólera de los Ejecutivos de los trusts se encargó de expresarlos mister Haight, Gerente de la Creole, sin regatear las consiguientes amenazas cuya ejecución en los siguientes años generaría el deterioro de la economía nacional, principalmente en las regiones petroleras. Transcribimos esas declaraciones de mister Haight porque sin tenerlas presente, es imposible comprender lo que ha venido ocurriendo en nuestro país desde 1959:

"No se ha dado ninguna consideración — rugió mister Haight— a nuestros derechos adquiridos y se han ignorado las obligaciones morales si no legales, de negociar este cambio —en la imposición fiscal— entre las partes interesadas... La medida puesta en ejecución por el Decreto del viernes pasado ignora por completo las reiteradas declaraciones hechas en la reciente campaña electoral por el Presidente electo de Venezuela, señor Rómulo Betancourt, en el sentido de que cualquier cambio en la política petrolera del país sería tratado como un asunto comercial y discutido ampliamente con la industria... Es sumamente dudoso que con el aumento de impuestos el Gobierno Nacional reciba por concepto de impuestos petroleros un ingreso mayor que el que hubiera recibido bajo el 50-50. El tiempo lo dirá. Pero el tiempo suele decidir tardamente..."

A pesar de que con esas declaraciones y amenazas atentatorias a nuestra dignidad y soberanía nacionales, las Casas Matrices de las compañías petroleras definieron la política que desde Nueva York y Londres seguirían y aplicarían en nuestro país, los personeros de las clases dominantes, agentes declarados o encubiertos de esos trusts, han persistido en ignorarlas, en silenciarlas, atribuyendo el estancamiento de las exportaciones de petróleo, las rebajas de los precios, la paralización al mínimo de las operaciones exploratorias, etc., a la "mala política que ha orientado al Gobierno", a que fue creada la "Corporación Venezolana de Petróleo" y a ella "asignadas" áreas de "reservas nacionales" y a la afiliación de Venezuela a la OPEP.

No tardaron los trusts en poner en ejecución sus amenazas. En febrero y abril de 1959 rebajaron arbitrariamente los precios a los petróleos de Venezuela y de los países del Medio Oriente. El efecto inmediato de esas rebajas, de las que por cierto quedaron excluidos los petróleos de Estados Unidos, pueden observarse en las siguientes cifras:

	1957	1959	1960
Exportaciones, incluido el "royalty" (en millones de metros cúbicos)	149	150	156
Valor de las exportaciones (en millones de bolívares)	7.865	6.608	6.606
Ingreso de divisas petroleras (en millones de bolívares)	4.048	4.281	3.556

Es decir, que en 1960, por una exportación de 156 millones de M³ y a base del complementario de la Renta de 45 por ciento, ingresaron 392 millones de bolívares en divisas de menos que en 1957 por una exportación de 149 millones de M³ y a base del complementario de la Renta de 26 por ciento y, ello, porque los precios del petróleo habían sido rebajados — término medio — de Bs. 52,61 el M³ en 1957 a Bs. 39,08 el M³ en 1960, o sea, en Bs. 13,53 el M³, mientras que favorecidas por esas rebajas de precios, las Casas Matrices comenzaron a batir de año en año nuevos records en sus utilidades.

Intentando ocultar el verdadero móvil de esas rebajas de precios, los agentes de las compañías petroleras argumentaron que fueron motivadas por las "presiones" que sobre los trusts ejercían los "consumidores" mundiales y por la presencia en el mercado mundial de excedentes de oferta de petróleo como consecuencia de los sucesos de Suez y el haber sido puestos en explotación los yacimientos de Libia, de Argelia, etc., argumentos deleznable por cuanto por una parte los "consumidores" no eran otros que los países altamente industrializados de Europa que por no poseer yacimientos petroleros en sus subsuelos o ser de pequeña magnitud, veíanse obligados, para satisfacer sus crecientes necesidades, de adquirirlo a esos trusts — las "siete hermanas" — que controlaban la producción de los países grandes poseedores de yacimientos — Medio Oriente y Venezuela — y con cuyos petróleos cubrían, como vimos, el 82 por ciento del consumo mundial, excluidos Estados Unidos, Canadá, la Unión Soviética y, por la otra, que resulta inconcebible que esos trusts aumentaran la producción para deliberadamente provocar un excedente de oferta con la consiguiente caída de los precios. En 1958 el consumo mundial llegaba a los 19.161.000 de barriles diarios, el que fue cubierto en la forma siguiente:

CONSUMO MUNDIAL (EN BARRILES DIARIOS)

Año	Venezuela	Medio Oriente	Otros	EE.UU., URSS, etc	Total
1958	2.440.000	3.745.000	426.000	12.580.000	19.161.000

Las rebajas de precios no tienen otra explicación viable, si se tienen presentes las amenazas de mister Haight y el hecho de que las "siete hermanas" controlaban también la distribución de combustibles en los mercados regionales a través de su red de subsidiarias que refinan, se compran y se venden entre sí crudos y derivados, que la de aumentar, como resultado de esa diversidad de operaciones, las utilidades de las Casas Matrices a costa de una mayor explotación de los países grandes productores de petróleo y, al mismo tiempo, en lo que respecta a Venezuela, presionar para lograr los objetivos a que hicimos referencia anteriormente: renovación de las concesiones que vencen en 1983 y el otorgamiento en concesiones o en cualquier forma disfrazada de los yacimientos que aún nos quedan.

En marcha el plan, a las rebajas de precios siguieron la disminución de las operaciones exploratorias, la reorganización de departamentos, el traslado de oficinas al centro, el abandono de "campos petroleros", etc., todo lo cual se tradujo en una violenta reducción del personal —obreros y empleados— que para 1966 llegó a unos 16.256 trabajadores, el 36 por ciento con respecto a 1958, como se desprende del siguiente Cuadro:

<i>Año</i>	<i>Empleados y obreros</i>
1948	55.170
1955	42.851
1957	45.650
1958	44.720
1960	40.690
1963	33.742
1966	28.464

Represalias éstas que han tenido más directa repercusión en las economías regionales por haber dejado de circular localmente montos apreciables de salarios y haber quedado en la indigencia miles de trabajadores petroleros y sus familias.

Los ingresos del Fisco por concepto de petróleo —impuestos y ventas del "royalty" a las compañías—, más bien aumentaron ligeramente:

<i>Años</i>	1958	1959	1960
(En millones de bolívars)			
Impuestos menores	186	156	138
Impuesto s/Renta (recaudados)	1.198	1.464	1.419
Venta del "royalty"	1.327	1.424	1.581
	2.711	3.044	3.141
(En millones de metros cúbicos)			
Producción	151	161	186
"Royalty"-petrolero (16-2/3%) ...	25	27	32

y, ello, debido por una parte a los aumentos habidos en la producción y, por la otra, a que el "royalty", por fuerza de los convenios existentes, tuvieron las compañías que continuar pagándolo a los precios de sus similares petróleos de Estados Unidos, que como vimos no fueron afectados por las rebajas de precios.

Esa diferencia entre el precio a que ha venido siendo pagado el "royalty" y el precio a que las compañías declaran haber vendido —precio de realización— el resto del petróleo exportado, si tomamos en cuenta que más del 50 por ciento del petróleo exportado es vendido en Estados Unidos y Canadá, sirvió muy posiblemente a la Oficina Recaudadora del Impuesto sobre la Renta, para formular reparos a las compañías petroleras, "reparos" que como veremos más adelante fueron objeto de insólita transacción en los "arreglos" a que compañías y Gobierno llegaron el año pasado (1966).

Frente a esas atentatorias actividades de los trusts, salvo la creación de la "Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de Hidrocarburos", entre cuyas atribuciones se estableció el no autorizar ventas en el exterior por las compañías a precios por debajo de los establecidos o con "descuentos" anormales y cuyo funcionamiento parece no ha tenido mayor eficacia, el Ejecutivo Nacional no tomó medidas para hacer cumplir a las compañías, en cuanto a exploración y explotación, las obligaciones que contrajeron al serles otorgadas las concesiones; impunemente reexportaron costosos equipos con destino a otros países en los que estaban incrementando sus operaciones —fracción de la llamada "desinversión de capital"—. Por su parte las clases dominantes, principalmente su máximo organismo, la Fedecámaras, en sus Asambleas anuales,

interpretando las medidas de "represalias" ejercidas por las compañías petroleras como si fueran exteriorización de una crítica situación en que se encontrara la "industria petrolera", aprobó resoluciones en el sentido de que el Gobierno debía dictar medidas urgentes que "salvaran" a esa industria del derrumbe total. Entre esas medidas sugirieron, que se debía permitir a las compañías pagar el "royalty" a los mismos precios que ellas declararan haber vendido el resto del petróleo, lo que equivalía a que el Estado renunciara a los convenios que las obligaban a pagarlo a los precios de sus similares de Estados Unidos, "estímulo" que, de haber sido acogida esa "sugerencia", hubiera representado para el Fisco que dejaran de ingresarle cientos de millones de bolívares por concepto de la venta del "royalty".

A medida que pasaba el tiempo, la economía nacional se deterioraba y las regiones petroleras salían de una "crisis" para entrar en otra. Para paliar la "recesión", el Gobierno dictó las "medidas económicas de emergencia", rebajó en un 10 por ciento los sueldos de los funcionarios públicos, devaluó indirectamente el bolívar aumentando el tipo de cambio de venta del dólar de 3,35 a 4,70 y, en enero de 1964, procedió a devaluarlo directamente al fijar el tipo de compra del dólar petróleo de 3,09 que regía desde 1937 en 4,40 y el del dólar hierro de 3,33 en 4,40, devaluación que reportaría a los trusts petroleros y a los del hierro, apreciable aumento de sus utilidades, como lo reconoció en una intervención pública el doctor Pérez Guerrero, Ministro de Minas e Hidrocarburos:

"Ahora bien, en lo que concierne al desarrollo industrial y en particular la exploración, las empresas petroleras obtendrán una ventaja apreciable con la aplicación de la medida — la devaluación—. Toda nueva inversión que efectúen en Venezuela va a requerir de su parte una cantidad menor de dólares, en proporción a la cantidad que se destine a la adquisición de bienes y servicios. Estamos conscientes de que muchos son los factores que estimulan la acción del desarrollo de las actividades petroleras, pero ciertamente, una reducción en el costo de inversión, es uno de ellos y, en determinadas circunstancias, puede llegar a ser decisiva...".

Los trusts no obstante estos "estímulos" no cesaron en llevar a cabo su plan de doble acción: mantener a Venezuela como su "reserva" de petróleo para el futuro y, con las represalias, presionar para que le fueran renovadas en 1983 sus concesiones y les fueran otorgadas otras nuevas. Continuaron despidiendo trabajadores, taponando pozos, reduciendo las labores exploratorias, rebajando los precios, etc.

A mediados del año pasado, como recordarán ustedes, el Ejecutivo Nacional convocó a las Cámaras Legislativas a sesiones extraordinarias para que conocieran

de un proyecto de "reformas tributarias", entre las que se destacaba la de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Es evidente que el fin perseguido por el Ejecutivo con esas "reformas" era el de obtener mayores ingresos fiscales para cubrir el galopante incremento de los "gastos corrientes". No nos detendremos en el examen de esas "reformas", limitándonos a señalar que tanto el bullicioso y pintoresco debate que tuvo lugar en las Cámaras como la desbordada campaña de prensa con sus "clases medias asalariadas" y las profusas declaraciones de "técnicos" y políticos, fueron bien aprovechadas por los trusts petroleros para conducir negociaciones con el Gobierno que favorecieran sus objetivos, exonerándolos de toda responsabilidad en la recesión económica de 1960-1962 y que aparecieran más bien como víctimas, al igual de todo el país, de la "ortodoxa" política de "No-más-concesiones" y de su secuela, la creación de la "Corporación Venezolana del Petróleo", política que atribuían exclusivamente al Gobierno. Esas negociaciones fueron orientadas a lograr que el Gobierno transara con las compañías la agresiva y violenta ofensiva que desde principios de 1959 venían desarrollando contra los intereses de la Nación. El contenido de transacción de esas negociaciones lo pusieron de manifiesto los mismos líderes del gobierno en sus declaraciones a la prensa. Por ejemplo, el doctor Guillermo Muñoz, diputado, expresó el 2 de octubre:

"Este triunfo —los "acuerdos" con las compañías— no fue mayor porque opiniones importantes de los partidos políticos negaron toda posibilidad de obtener aportes superiores de las empresas. Algunos de esos partidos dijeron, por ejemplo, que las compañías se irían del país, que se estaba matando a la "gallina de los huevos de oro"; que ya nuestra producción no soportaba la competencia internacional... Yo me pregunto cuál habría sido el resultado, si sectores políticos calificados hubieran respaldado al Gobierno como lo hizo AD en la época del General Medina Angarita. Estamos seguros de que si el país, como ocurrió entonces, cuando AD —siendo oposición— ofreció el respaldo del partido frente a las compañías petroleras, hubiera prestado apoyo en la misma medida, se habría logrado más..."

definiendo así, sin proponérselo, el carácter y contenido de los "acuerdos" y ocultando con esa formulación, de pasada, la verdad de que el Gobierno había cedido, abdicado a las presiones de los trusts internacionales coaligados con las "fuerzas vivas" que a través de sus partidos políticos perseveraban en su decidida oposición a que la Nación ejerciera su soberano derecho de explotar directamente su petróleo, de aumentar la imposición fiscal a las compañías, de obligarlas a cumplir las leyes y a respetar eficientemente los intereses nacionales tanto en cuanto a inversiones, operaciones exploratorias, conservación de yacimientos, como

a volumen de producción y, muy principalmente, en lo que respecta a los precios del petróleo.

El sólo anuncio por el Presidente de la República de haberse celebrado unos "arreglos" entre las compañías y el Gobierno en torno a la explotación del petróleo, llenó de euforia a los representantes de las compañías y de las "fuerzas vivas" por considerar que esos "arreglos" inspirarían a los trusts internacionales la requerida confianza para que de nuevo invirtieran sus capitales en el país y reanudaran las operaciones exploratorias que tenían suspendidas. El señor Johny Phelps, entre otros, manifestó que

"...el arreglo en materia petrolera abre un futuro promisorio a la economía del país. Se ve que hay disposición —de parte del gobierno— de poner atención a los planteamientos formulados por diversos sectores de la vida nacional..."

El doctor Federico Baptista, alto dirigente de la Creole, declaró en esos mismos días:

"...que como consecuencia de la política que ha dado a conocer el Gobierno, se esperan signos de recuperación de la industria petrolera venezolana, que se volverán a recuperar los mercados y a comenzar las exploraciones adecuadas para mantener las reservas petroleras venezolanas a un nivel saludable..."

Las negociaciones giraron en torno a los "reparos" que la Oficina Recaudadora del Impuesto sobre la Renta había formulado a las compañías, a la fijación de unos "precios de referencia" y al aumento de la imposición fiscal, dejando en suspenso el "acuerdo" de fondo —al que en estos días se le da forma definitiva— concerniente a lo que el Gobierno entregaría a las compañías en compensación de su aquiescencia de suspender sus agresivas represalias.

Sea quien fuere el contribuyente, las autoridades fiscales tienen, por mandato de la Ley respectiva, el derecho y la obligación de examinar la declaración de Renta que le sea presentada y, de existir en ella alguna irregularidad, formular los correspondientes reparos y proceder en consecuencia. En el caso que nos ocupa, como en el de las compañías del hierro —la Iron y la Orinoco— que fueron conminadas por las autoridades fiscales a reintegrar al Fisco, respectivamente, Bs. 80 y 140.000.000 por haber declarado ventas de hierro a precios inferiores a los que regían en el mercado norteamericano, se trata, de que las compañías petroleras, con la finalidad de evadir el impuesto sobre la Renta y así reducir la participación del Fisco en sus utilidades, reincidiendo una vez más, acusaron en sus declaraciones ventas de crudos y derivados a menores precios de los que en efecto los habían vendido en el mercado exterior. No había

sido ésta la primera vez que el Fisco les formulara reparos, como lo declararon algunos interesados. Lo que sí es cierto es que las adulteraciones de los precios, con posterioridad a 1959, adquirieron una magnitud nunca antes alcanzada y, ello, porque hasta febrero de ese año, los precios del petróleo en el mercado mundial se fijaban conforme a los que rigieran en Estados Unidos para sus propios petróleos, descontando los fletes entre el puerto de embarque del país productor y los puertos norteamericanos de referencia, sistema que fue desplazado al proceder los trusts, en ese año y mes, a rebajar arbitrariamente los precios de los petróleos de Venezuela y de los países del Medio Oriente. Como los precios de los petróleos norteamericanos no fueron afectados por esas rebajas y continuaron siendo determinados por sus respectivos altos costos de producción, ocurrió, en lo que respecta a los petróleos producidos en Venezuela, que éstos, en lo sucesivo tuvieran dos precios independientemente de ser de idéntica calidad e iguales características: el precio del petróleo-“royalty” —el 16-2/3% de la producción— que debía ser el mismo, en virtud de los convenios existentes para determinar su valor mercantil, del de sus similares petróleos de Estados Unidos y, el precio que los trusts internacionales fijaban al restante 83-1/3% de la producción, diferencia entre ambos precios que fue estimada en 1960 en Bs. 13,46 el metro cúbico.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que las compañías petroleras han venido colocando en Estados Unidos y Canadá el 53 por ciento del petróleo que exportan, es evidente y comprobable, que deducida la parte correspondiente al “royalty”, el restante volumen de ese petróleo, unos 400 mil barriles diarios, lo vendieran a los precios vigentes en esos países, burlando así al Fisco venezolano, en sus declaraciones de Renta, en cantidades equivalentes a esas diferencias de precios. Tales descarados robos a Venezuela los han venido realizando los trusts internacionales, como lo indicamos anteriormente, valiéndose de su red de subsidiarias, que permite a éstas transferirse entre sí cuantiosas utilidades que, en definitiva, se concentran en las Casas Matrices.

En ese mecanismo fraudulento está el origen de los “reparos”, ya que por imperio de la Ley venezolana —como vimos— las autoridades fiscales deben investigar las declaraciones de renta, calcular y denunciar las irregularidades y reclamar el correspondiente reintegro, Ley que, por otra parte, las compañías petroleras están obligadas a acatar y cumplir. La adulteración y las rebajas de los precios, es una de las técnicas empleadas por los trusts internacionales para extorsionar aún más a nuestros países, como lo demuestra el hecho de que la Standard, la Shell, etc., desde 1959 no obstante las rebajas de precios, hayan venido obteniendo de año en año cada vez mayores utilidades.

Desde antes de la promulgación de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se formularon reclamaciones a las compañías petroleras y cada vez, por gestiones de sus agentes criollos o de autoridades venales o complacientes, encontraron la forma de transar el monto del reclamo. Los actuales "reparos", según estimaciones filtradas de fuentes oficiales, montaban a los 3.000 millones de bolívares entre los años 1959 y 1965. Pero con la transacción del "arreglo" quedaron reducidos a 700 millones, que las compañías reembolsarán parte en dinero y en tres cuotas anuales y parte en obras, por lo que ese "arreglo" sobre "reparos" acarreará a la Nación una pérdida de 2.300 millones de bolívares, y falta saber si los tales 700 millones serán contabilizados por las compañías en la misma forma en que lo fueron los 2.118 millones de bolívares de las concesiones otorgadas por Pérez Jiménez en los años 1956 y 1957, como inversión de capital, pues de procederse así, la amortización de esos 700 millones equivaldrá a que las compañías a lo que se han comprometido es a hacerle al Estado venezolano un empréstito a largo plazo y sin fecha de vencimiento, en lugar de reintegrar a la Nación el dinero que le han robado, o si ustedes lo prefieren, que le han escamoteado.

Muy significativas a este respecto y en relación con el "arreglo" sobre "precios de referencia" son las declaraciones que emitieron en esos días Mr. Pocok, Presidente de la Shell y el doctor Luis Alcalá Sucre, Presidente de la Mene Grande, coincidentes en que con esos "arreglos" se llegó entre el Gobierno y las compañías petroleras:

"a olvidar por completo todo lo pasado y se abrió un paréntesis de confianza hacia el porvenir... (...) se despejaron las incógnitas que ensombrecían el futuro petrolero"...

Todo lo pasado... ¡Las represalias, la recesión económica de 1960-62, los miles de trabajadores despedidos, los millones de bolívares escamoteados con la manipulación de los precios...!!

En lo referente al "arreglo" sobre los "precios de referencia", con el que el Gobierno en apariencia se proponía, por una parte, contrarrestar la erosión de los precios y, por la otra, con fines fiscales, establecer por anticipado los precios que regirán durante los próximos cinco años, hasta 1971, para los crudos y derivados que las compañías exporten desde Venezuela, se convino, según explicó el Ministro de Minas e Hidrocarburos en su alocución, que tomando como base los precios de 1965, se agregara en cada barril y a partir de este año (1967), uno o más centavos en forma progresiva hasta

1971; aumentos éstos que fueron establecidos previa "consulta y de común acuerdo con las compañías". En el caso en que las compañías declaren que no pudieron vender los crudos y derivados exportados a los precios fijados —los que se denominan "precios de referencia"— tendrán de todos modos que liquidar el impuesto sobre la Renta en base a esos precios. En el caso en que las compañías declaren haber vendido a más altos precios que los de "referencia", liquidarán entonces de acuerdo con esos más altos precios, de donde el Fisco conocerá, con anticipación, los precios a los que las compañías harán sus declaraciones de Renta y asegurado, además, de que no se producirán nuevas bajas. Pero, como el Ministro declaró que con esa fórmula de "precios de referencia" quedaban eliminados los "reparos" en el futuro, cabe interpretar esa afirmación oficial en el sentido de que si las compañías hacen sus declaraciones de renta en base a los "precios de referencia", el Fisco se abstendrá, renunciará a formularles "reparos", lo que quiere decir, que mientras en los Estados Unidos continúen en vigencia precios más altos que los "precios de referencia", los trusts internacionales quedarán en libertad de realizar en ese mercado sus ventas de crudos y derivados a los precios que en él rijan, ventas, que, como vimos, montaron en 1965 a unos 400 mil barriles diarios, excluido el petróleo-"royalty". Los "precios de referencia", por consiguiente, servirán para "legalizar" el escamoteo de que ha venido siendo víctima la Nación por parte de los trusts internacionales.

En relación a la eliminación de los "reparos" y a los más altos precios que rigen en los Estados Unidos, reviste una enorme importancia alertadora, lo afirmado por *El Universal* en su edición del 1º de octubre, al comentar los "arreglos":

"Y, finalmente, el acuerdo logrado con el Gobierno establece que este último —el gobierno— deberá, como contrapartida de estímulo, aplicar descuentos sobre el valor de las regalías —el "royalty"— que recibe en dinero efectivo de las compañías...".

o sea, que el Gobierno se comprometió a poner en práctica la sugerencia de estímulo a la "industria petrolera" sugerida por la Fedecámaras en su "Carta de Mérida" y consistente, recordamos, en que el Estado cobrara a las compañías el "royalty"-petrolero que les vende a los mismos precios que ellas le fijan al resto del petróleo venezolano, en este caso, a los "precios de referencia" o, en otros términos, que Venezuela renunciara a los convenios existentes mediante los cuales el valor mercantil del petróleo-"royalty" se determina a iguales precios a los que en Estados Unidos rijan para sus petróleos similares a los nuestros.

Si en el año de la "Carta de Mérida" se estimó que esa sugerencia, de haber sido acogida, hubiera representado para la Nación una pérdida de unos 300 millones en la venta de su "royalty", ahora esa pérdida sería muchísimo mayor.

No es difícil deducir que si el "arreglo" sobre "precios de referencia" permitirá al Fisco conocer con anticipación los precios en base a los cuales las compañías confeccionarán sus declaraciones de renta y la seguridad de que en los próximos cinco años no tendrán lugar nuevas rebajas, es a los trusts internacionales a quienes ese "arreglo" favorecerá principalmente, ya que amparados en los "precios de referencia" y en la eliminación de los "reparos", quedarán en libertad de vender los crudos y derivados que exporten a los más altos precios que rijan en Estados Unidos y Canadá. Y todo ello —según el Ministro— para que los "niveles de precio no fueran a incidir negativamente sobre la competitividad del petróleo venezolano frente a petróleos de otras regiones del mundo".

A veces los "motorizados" de las compañías petroleras cometen indiscreciones. Por ejemplo, el 18 de octubre el doctor Luis Alcalá Sucre reveló a la prensa:

"Con los precios de referencia desaparece para la industria petrolera venezolana el sistema de los reparos... garantizan la certidumbre de saber a qué precios se puede vender el petróleo y al mismo tiempo desaparece el temor de los reparos...".

En cuanto al aumento impositivo, el "arreglo" se concretó a introducir modificaciones en el proyecto original de Ley de Impuesto sobre la Renta que el Ejecutivo había introducido al Congreso, sustituyendo el llamado "impuesto o complemento selectivo" que incidía sobre las compañías petroleras y del hierro, por una elevación de la escala del Complementario a 52 por ciento sobre la renta que exceda de los 28 millones de bolívares en el año. Se ampliaron los desgravámenes e incentivos con el fin, dijo el Ministro, de que "a través de ellos las empresas se vean animadas a invertir en Venezuela". Con el estímulo a las inversiones que las compañías realicen en otras actividades distintas al petróleo y hierro, se abrieron aún más las puertas para una mayor penetración y una más profunda mediatización de nuestra economía por el capital extranjero. Las modificaciones al proyecto original de Ley de Impuesto sobre la Renta evidenciaron que, en el fondo y en definitiva, fueron los trusts internacionales quienes decidieron el régimen impositivo que prevalecerá en el petróleo y el hierro, lo que implica un atentado al derecho soberano e irrenunciable que tiene Venezuela de darse sus propias leyes.

El pueblo venezolano con la consigna de "No-más-concesiones" venía expresando desde 1936 su anhelo y aspiración de que todo el petróleo contenido en las áreas sobre las cuales no existieran otorgadas concesiones, fuera extraído, refinado y vendido directamente por el Estado, política que en su consecuente aplicación - desarrollo y fortalecimiento de la "Corporación Venezolana del Petróleo" - conduciría a que desapareciera hasta extinguirse el control que sobre la explotación de nuestro petróleo han venido ejerciendo desde sus comienzos los trusts internacionales. Pero, ante el agresivo rechazo de esa política por parte de los trusts internacionales como de sus agentes más caracterizados dentro de las "fuerzas vivas", el Gobierno cedió, claudicó al anunciar que en sustitución del régimen de concesiones se aplicaría la fórmula "Frondizi" de celebrar con los trusts petroleros "contratos de servicio" mediante los cuales y fungiendo de "puente" la "Corporación Venezolana de Petróleo", el Estado y el trust contratista se repartirían los riesgos y los beneficios de la explotación de las áreas sobre las que no están otorgadas concesiones, asegurando así a los trusts su hegemonía sobre la explotación de nuestro petróleo.

El 28 de octubre se dio a conocer por la prensa el Informe del "Consejo Nacional de Energía" sobre las "modalidades, normas y bases" que regirían los "contratos de servicio", cuyo contenido y proyecciones desde días antes habían podido ser apreciadas a través de las diversas y coincidentes declaraciones de líderes políticos y de representantes de las compañías petroleras. Por ejemplo, el 12 de octubre el señor Luis Tovar, Presidente de la Fedepetrol declaró en Ginebra que:

"El gobierno ha iniciado una nueva política tendiente a lograr una mayor expansión económica de la industria privada petrolera. Esa fórmula consiste en los contratos de servicio, a través de los cuales aspira el Estado administrar sus concesiones - las áreas "asignadas" a la CVP - en sociedad con las empresas petroleras o bien sea, mediante empresas mixtas..."

En esos mismos días el doctor Antonio Ledezma Lanz, Director de la Petroquímica expresó:

"Las nuevas fórmulas - los contratos de servicio - garantizan al país un mayor grado de participación, no solamente en cuanto a rendimiento que se obtendrá por el capital invertido en la actividad petrolera, sino también en la participación directa de la CVP en los negocios de la industria..."

corroborando así la opinión emitida con anterioridad por el doctor Pedro Tinoco, de la Fedecámaras:

"Brillantes posibilidades para el desarrollo futuro de la industria petrolera abre el régimen de Contratos de Servicio... lo más importante es que el sistema contratos de servicio puede estimular activamente la inversión de nuevos capitales en la industria petrolera, con lo cual tenderá a despejarse más el panorama petrolero para 1983...".

Por su parte el doctor J. A. Giacopini Zárraga, directivo de la Shell, el día 26 de octubre exteriorizó la opinión de los trusts:

"El convenio a que se llegó con el gobierno una vez arreglados los puntos referentes a reparos y a la fijación de precios de referencia, establece una situación bastante alentadora. Se ha despejado una incógnita y ello crea una situación favorable para el desarrollo de la industria, pues ahora trabajaremos sobre bases firmes y con mayor tranquilidad...".

En su Informe, que el Ejecutivo Nacional pasó al Congreso para su discusión y aprobación, el "Consejo Nacional de Energía", partiendo de que la "nación debe recibir por la extracción de su petróleo una compensación cónsona con su valor", estableció dos modalidades de contratación de la CVP con los trusts extranjeros: A).—Los Contratos de Servicio Directo, o sea, que la empresa contratista extraería el petróleo por cuenta de la CVP, conviniendo ésta en traspasarle todo o parte del crudo que sea extraído, así como las operaciones de su venta, rigiéndose la participación de la CVP en las ganancias que se obtengan por las cláusulas que al efecto se incluyan en el Contrato y, B).—La Compañía, Asociación o Sociedad Mixta que se estructure entre la CVP y un contratista —empresa extranjera o nacional— para la explotación de una área "asignada" mediante la constitución de una compañía en la que se compartirán los gastos de inversión proporcionalmente a la parte que cada uno aporte al capital social de la compañía. Estas Sociedades Mixtas podrán revestir dos modalidades: la "Compañía Mixta Limitada a la Extracción", es decir, que actuaría hasta la extracción del petróleo, entregando la CVP al contratista la parte convenida de petróleo y, la "Compañía Mixta Integrada", que se encargaría, además, de vender el petróleo extraído en el mercado internacional. Esta compañía pagaría los impuestos y las utilidades netas se repartirían entre la CVP y el contratista de acuerdo con lo que se pauten en el Acta constitutiva. Tanto en la modalidad Contrato de Servicio Directo como en la de Compañías Mixtas, las inversiones iniciales hasta llegar a la producción comercial, correrían por cuenta exclusiva del contratista, riesgo que éste aceptaría en base a la mayor participación que a su favor fuere establecido en el contrato.

Para la celebración de tales contrataciones, según el Informe, se procederá por vía de "licitación" en forma similar a lo que la actual Ley de Hidrocarburos

estatuye para las concesiones en "reservas nacionales", dándose la buena pro al contratista que ofrezca las más favorables condiciones. La duración de los Contratos de Servicio la fija el Informe entre 15 y 20 años a contar del momento en que se alcance la producción comercial. Para la formalización legal de los Contratos el Informe establece que deberán ser previamente aprobados por el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Lo que evidentemente persiguió el Ejecutivo Nacional al someter a conocimiento del Congreso esas "bases" y "normas" elaboradas por el "Consejo Nacional de Energía", fue arropar con el manto del Poder Legislativo la claudicación que entraña el estrangulamiento de la consigna de "No-más-concesiones", de lo que ella expresa: la aspiración y resolución de los venezolanos nacionalistas de que todo el petróleo contenido en las áreas del territorio nacional sobre las cuales no existan otorgadas concesiones, sea directamente extraído, refinado y vendido por el Estado.

La "Comisión Bicameral de Minas e Hidrocarburos del Congreso" inició el estudio del Informe y le formuló graves objeciones, entre ellas, la de que, conforme a disposiciones categóricas de la Constitución, era imprescindible la aprobación por el Congreso de los Contratos de Servicio para que pudieran ser celebrados por la CVP, contrariamente a lo que el Informe establecía de que esa aprobación correspondía al Ejecutivo Nacional. Esa objeción la ratificó el Fiscal General de la República en oficio dirigido a la Bicameral en respuesta a la consulta que al respecto ésta le había hecho, asentando que "este requisito --la aprobación del Congreso-- es previo y no posterior a la celebración de cada uno de los contratos de servicio", arruinando así el propósito del Ejecutivo Nacional de que con la sola aceptación en general por el Congreso de las "bases" y "normas", quedara facultado para por sí aprobar y autorizar, por intermedio del Ministro de Minas e Hidrocarburos, la celebración de cada uno de los contratos de servicio. En ese impasse, el Congreso clausuró sus sesiones en diciembre y la discusión de las "bases" y "normas" fue aplazada para las sesiones ordinarias de marzo de este año.

A principios de enero fue designado Ministro de Minas e Hidrocarburos el doctor Mayobre, quien en sus primeras declaraciones a la prensa - enero 3-- se manifestó continuador de la política petrolera de sus antecesores, añadiendo, sin embargo, que el hecho de ser Venezuela un país esencialmente exportador de petróleo, determina la orientación de su política petrolera, por lo que se debía apresurar la celebración de contratos que "brinden seguridad a todos los interesados a fin de estimular la inversión y las actividades de la industria", ya que

la política del gobierno "ha sido y seguirá siendo la de auspiciar la cooperación de la inversión privada en ese campo dentro de las líneas generales".

Sobre la marcha y para evadir las disposiciones constitucionales que consagran la aprobación por el Congreso de cada uno de los contratos de servicio que se vayan a celebrar, surgió el recurso de modificar la Ley de Hidrocarburos, modificación "que de producirse" —declaró el 5 de mayo el doctor Dubuc, Presidente del Senado— "tendrá como objetivo precisar la figura jurídica de los Contratos de Servicio".

Entre tanto se reunía en Margarita la Asamblea anual de Fedecámaras, expresando en ella el doctor Uslar Pietri:

"Venezuela está pagando y va a pagar, a un precio muy alto, el lujo suicida de haber pasado nueve años sin definir una política dinámica en materia petrolera... (...) El fin de las vacas gordas petroleras parece anunciarse únicamente para nosotros, y por eso cabría preguntar quiénes son los responsables de esta situación... (...) Este es el momento en que nadie, absolutamente nadie, dentro o fuera de Venezuela, sabe qué va a pasar con las actuales áreas de concesiones, que representan aproximadamente el 80 por ciento de nuestra capacidad productora y que llegan a su expiración dentro de quince años. Cada día que pase sin definir esta situación, se traducirá en desinversión y deterioro de la posición de Venezuela en los mercados mundiales...".

aclarando así el doctor Uslar Pietri, hasta para los más ciegos, que la definición de política petrolera que exigen los trusts internacionales, estriba en que desde ahora se les asegure y garantice que las concesiones les serán renovadas en 1983, lo que conlleva que de inmediato les sean otorgadas directa o disfrazadamente nuevas concesiones.

Para cooperar, ya que se queja de que el Gobierno nunca lo consulta, el "Consejo de Economía Nacional" organizó un ciclo de charlas sobre el petróleo y, en una de ellas, el doctor Manuel Egaña abundó con los planteamientos del doctor Uslar:

"...lo de mayor interés y preocupación, es la interrogante que está planteada para la industria sobre las presentes concesiones ¿qué va a ocurrir a partir de 1983, cuando se vencen las concesiones?", pronunciándose porque "debería iniciarse la renegociación de las concesiones estudiando la posibilidad de que, dentro del espíritu de la nueva Ley —la de Hidrocarburos— se establezcan compañías mixtas...".

A su vez, en el Senado, el doctor Mayobre dejó oír su opinión:

"Yo creo que es necesario empezar a conversar sobre 1983. El Gobierno está consciente de la importancia capital que tiene para la economía y para la vida

venezolana, lo que se decida para 1983... (...) Si el Gobierno va a hablar con las compañías petroleras no tiene sino dos alternativas. La primera alternativa sería reintegrar las concesiones en 1983 y, la otra, renovar las concesiones. Con los Contratos de Servicio se abren otras posibilidades que pueden servir formas de asociación que no sean esas dos alternativas rígidas que se han indicado" (*El Nacional*, 4 de junio de 1967).

En esa sesión del Senado intervino a continuación el doctor Uslar Pietri, resumiendo en esta forma la identidad de los puntos de vista del doctor Mayobre con los suyos:

"El doctor Mayobre ha dicho lo siguiente: en primer lugar, ha dicho que esta política —la del gobierno— ha tenido un costo; que se han perdido mercados —que es lo que yo he asegurado—, que ha habido desinversión —que es lo que yo he asegurado—, que hemos tenido precios no realistas y que no hay que encarar —lo ha dicho él—, la necesidad de llegar a precios realistas aun cuando eso signifique renunciar a ciertas aspiraciones dogmáticas. Ha dicho igualmente, que ha habido una disminución de reservas, claro que es lo que hemos dicho y lo que hemos comprobado, porque es público y notorio. Ha dicho, igualmente, que esto no es satisfactorio, y esto es lo que yo he dicho. Ha dicho igualmente, que viene 1983 y que no podemos esperar a que llegue; hay que comenzar a actuar para tratar de convertir esas áreas bajo concesión en su totalidad o en gran parte a la forma de contratos de servicio. Esa es una política. Y ha dicho, igualmente, que Venezuela necesita una política agresiva para luchar en sus mercados... una política que lo ponga —al Estado venezolano— en pie de competencia en los mercados mundiales y que si es necesario hacer sacrificios en precios, se haga, si eso realistamente lo requiere el país...".

Nos hemos extendido en esta cita porque, no habiendo sido publicada en la prensa la intervención del doctor Mayobre ni por éste desmentidas las identificaciones expresadas por el doctor Uslar, esa cita, además de permitirnos conocer los puntos de vista de ambos personajes, nos suministra la evidencia de que ellos coinciden en lo que debe ser la nueva política, coinciden en la definición de la nueva política, la que no es otra que aquella que satisfaga los objetivos de los grandes trusts, que les asegure, desde ahora, con los contratos de servicio, su hegemonía sobre las áreas no otorgadas en concesiones y con posterioridad a 1983, el continuar ejerciendo esa hegemonía sobre la totalidad de nuestro petróleo, sin que entorpezcan su libertad de acción "aspiraciones dogmáticas", pues "la necesidad de Venezuela es que se desarrolle la industria petrolera y se llegue a precios realistas, aunque para ello se tengan que hacer sacrificios": tales la independencia económica de la Nación y su participación cada vez menor en barril de petróleo que sea extraído.

Así pues, el "acuerdo" que había quedado en suspenso a raíz de los "arreglos" que compañías y gobierno celebraron el año pasado sobre "reparos", "precios de referencia" e "imposición fiscal", y cuyo fondo y contenido giraba y gira hoy en torno a lo que el gobierno se comprometería a entregar a las compañías por suspender las represalias que desde 1959 han venido ejerciendo contra Venezuela, parece estar dependiendo en estos momentos tan sólo de que el Congreso Nacional sancione el monstruoso hecho de que con una modificación a una Ley especial —la de Hidrocarburos—, se atropellen, se abroguen en su aplicación concreta en este caso, disposiciones consagradas en la Constitución —los artículos 126 y 127— que estatuyen la "aprobación previa y no posterior por parte del Congreso para la celebración de cada uno de los contratos de servicio".

El proyecto de modificación a la Ley de Hidrocarburos —concretamente de su artículo 3º— fue introducido al Congreso por el Ministro de Minas e Hidrocarburos. Al efecto, es oportuno transcribir la opinión que el doctor Pérez Alfonzo emitió en rueda de prensa el 17 de junio:

"Yo nunca creí que se iba a modificar la Ley de Hidrocarburos. Ahora se plantea una grave interrogante. Si se acepta esa modificación, el problema se deja en manos libres de los gobiernos y no se sabe cuál va a ser el gobierno en el futuro. Los Contratos de Servicio deben estudiarse en cada caso particular y ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional. Es decir, que no había necesidad de reformar la Ley. Si se deja en libertad al Ejecutivo, nadie podría garantizar la suerte de los contratos de servicio y que los mismos ni llegaran a convertirse en concesiones disfrazadas".

Por segunda vez, el 30 de junio, clausuró el Congreso Nacional sus sesiones ordinarias sin haber discutido las "bases" y "normas" de los "contratos de servicio" y menos aún el proyecto de modificación del artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos, por lo que sobre la marcha fue convocado a sesiones extraordinarias. El pasado 10 de julio, el doctor Hernández Grisanti declaró a *El Nacional* que la "Comisión de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados" estaba discutiendo la modificación a la Ley de Hidrocarburos y que en breve se pasaría a dicha Cámara el informe respectivo para su consideración. Explicó:

"que el nuevo sistema que se propone poner en práctica el gobierno, en relación con su obligación de obtener una previa autorización del Parlamento para esa contratación, significa un control más amplio por parte del Congreso, porque no se trataría de bases generales sino que deberán ser más precisas, detalladas y específicas. Esto significa —agregó— que antes de celebrar cualquier contrato,

el Ejecutivo estará obligado a informar al Congreso Nacional de todas las condiciones importantes que puedan contener esos contratos...".

declaración de la que lógicamente se desprende que para la celebración de cada uno de los "contratos de servicio" no se requerirá, como lo consagra la Constitución, la "aprobación previa y no posterior" del Congreso Nacional. En la sesión del día 13, el diputado Abreu propuso fuera reformado el ordinal 6º del artículo 3º cambiando la frase que dice: "se requerirá la aprobación del Presidente de la República en Consejo de Ministros" por la de "aprobación del Congreso Nacional en sesión conjunta del Senado de la República y la Cámara de Diputados". Es de advertir que hasta hoy no han sido publicados ni el texto modificado del artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos ni el texto de las "nuevas, detalladas y específicas bases y normas".

Pero regresemos a los primeros días de junio cuando, como impacto inmediato del conflicto bélico entre los países árabes e Israel, los respectivos gobiernos árabes detuvieron, intervinieron la extracción y manipulación del petróleo del Medio Oriente hasta ese momento controladas totalmente por los trusts angloyanquis. En previsión de la consiguiente escasez de crudos, Mr. McNamara, Secretario de la Defensa de Estados Unidos, anunció el día 7 planes de su Gobierno en los que se incluía "un abastecimiento adicional de petróleo por parte de las refinerías del Caribe que procesan el crudo venezolano"; anuncio que se tradujo en nuestro país en que las compañías petroleras, para proveer el aumento de petróleo requerido por los Estados Unidos para su "seguridad nacional", procedieran rápidamente a conectar a sus oleoductos los pozos que desde hacía años tenían taponeados, quedando así al descubierto, evidenciado que es en el exterior donde se toman las decisiones sobre las actividades de la "industria petrolera", o sea, que se aumenta o disminuye la producción, se paralizan las exploraciones, se lanzan a la desocupación miles de trabajadores, se manipulan los precios y los mercados según convenga a los intereses y necesidades de los países de origen de los trusts que controlan nuestro petróleo, atropellando impune y descaradamente la soberanía de nuestro país.

El 10 de junio el Gobierno norteamericano declaró, como complemento operativo,

"un estado de emergencia del petróleo con motivo de la interrupción de los envíos del Medio Oriente... y autorizó a las empresas norteamericanas a abastecer a los países de Europa Occidental afectados por la crisis... y, según esa autorización,

las compañías podrían legalmente realizar operaciones en común que en tiempo normal serían impedidas por la Ley Antitrusts...".

La Mene Grande aumentó su producción de 500 mil a 616 mil barriles diarios, la Creole en 60 mil y la llevará a los dos millones diarios y la Shell activizó todos sus campos a fin de almacenar crudos para los grandes tanqueros que comenzaban ya a atracar en los puertos de embarque. Diversos sectores de las "fuerzas vivas" saludaron esos aumentos como promesas esperanzadoras de mayores ingresos fiscales a repartirse entre ellos. Su más caracterizado y capacitado vocero, el doctor Uslar Pietri —y es lo que explica que lo hayamos citado tan repetida y extensamente— les advirtió, sin embargo, que:

"Si Venezuela se limita a aprovechar la posibilidad actual de vender más petróleo mientras duren los efectos de la crisis, corre el riesgo de que, una vez normalizada la situación en el Medio Oriente, vuelva a encontrarse en una situación similar a la que tenía antes de la crisis... Es ahora el momento precioso de negociar la situación del petróleo venezolano en los Estados Unidos y de lograr, entre otras cosas, la eliminación de las restricciones. Nadie puede olvidar tan pronto la lección de la vulnerabilidad en que colocan a Europa y a los Estados Unidos su dependencia de un proveedor tan inestable y conflictivo como el Medio Oriente...",

cuando en verdad esa vulnerabilidad, demasiado conocida, apreciada y calculada por los trusts angloyanquis, es la que los ha inducido y determinado a querer controlar todos los yacimientos petroleros de Venezuela para conservarlos como sus seguras reservas para el futuro o cualquier contingencia que se les pueda presentar; objetivo que obtendrán en "bandeja de plata" de prosperar la "nueva política petrolera" en torno a la cual se han revelado identificados, "definidos" el Gobierno y las "fuerzas vivas" a través de las declaraciones de sus respectivos voceros, los doctores Mayobre y Uslar Pietri.

Esa "vulnerabilidad" del Medio Oriente, por el contrario, es la que imprime precisamente su máximo carácter realista a la consigna de "No-más-concesiones" con la que el pueblo venezolano ha venido expresando desde 1936 su aspiración y resolución de que sea conservado y reservado para la Nación, para los venezolanos de hoy y del mañana incierto, todo el petróleo contenido en las áreas hasta ahora no otorgadas en concesión y en las que en 1983 reintegrará a su patrimonio el vencimiento de las actuales concesiones; política clara, precisa, definida, irrenunciable y justa que por ser la que interpreta los intereses nacionales es la que el Estado venezolano debe aplicar.

La "nueva política" de "contratos de servicio", de concesiones disfrazadas, la "definición" tan voceada y tan perseverantemente reclamada por el doctor

Uslar Pietri y en torno a la cual se han identificado el Gobierno y las "fuerzas vivas", a lo que conducirá es a remachar aún más el yugo imperialista que ha mantenido a Venezuela maniatada en el subdesarrollo y a la mayoría de su población sumida en la miseria, mientras un puñado de aprovechadores anti-nacionales y sin escrúpulos de ninguna clase se ha venido enriqueciendo cada vez más aprisa. En esa dependencia y mediatización, en ese subdesarrollo y en la realidad de ese irritante contraste, es que se han generado y se generan los graves y múltiples problemas económicos, sociales y políticos que confrontan las regiones y el país en su conjunto.

La "crisis petrolera" del Medio Oriente es ahora que entra en su fase de mayor envergadura. Los gobiernos árabes han perseverado en mantener la prohibición de exportar petróleo a Estados Unidos, Inglaterra y Alemania Occidental, a pesar de lo que económicamente para ellos les representa el dejar de percibir los cuantiosos ingresos provenientes del petróleo. Por otra parte, Habdulah El-Tariki, ex Ministro de Petróleo de Arabia Saudita, ha planteado la "arabización" —nacionalización— de todo el petróleo de los países árabes y la constitución de una gran compañía que lo extraiga, lo refine, lo transporte y lo venda para beneficio exclusivo de todo el pueblo árabe. Siria, Irak, la República Árabe Unida (RAU) y Argelia apoyan decididamente ese planteamiento y prometen su realización en el futuro inmediato. No serán, por consiguiente, mercados y altos precios los que faltarán al petróleo venezolano. Y Venezuela, si administra directamente su petróleo y demás recursos naturales no-renovables para beneficio y provecho de todos los venezolanos, librada de la dependencia de los trusts internacionales, podrá por fin transitar hacia el futuro como Nación soberana.

Si la Primera y Segunda República se hundieron en el fracaso no obstante el fulgor de la "Campana Admirable", ello se debió a que los realistas hábilmente mantuvieron a los desheredados, los discriminados, la aplastante mayoría de la población al margen y en actitud de hostilidad contra la causa emancipadora. Pero desde el año 15 las huestes llaneras comandadas por "pardos" —Páez, Zaraza, Cedeño, Farfán, etc.— imprimieron rumbo franco a las operaciones militares y en Carabobo resonó la diana de la victoria final. Así, en los años que corren, no conquistaremos nuestra independencia económica, no destruiremos el yugo imperialista que nos extorsiona, hasta tanto los desheredados, los discriminados, la aplastante mayoría de la población no sienta como tarea suya propia que la Nación extraiga, manipule y venda directamente los recursos natu-

rales no-renovables existentes en nuestro subsuelo, no se oponga firmemente y derrote la "nueva política" de "empresas mixtas", de "contratos de servicio" impuesta por los trusts petroleros con la aquiescencia del gobierno y de las "fuerzas vivas". Augurando la victoria, invitamos a ustedes a difundir este mensaje en las ciudades y pueblos, en los más humildes caseríos de nuestro país.

Separata de la Revista Economía y Ciencias Sociales. Año IX — Nº 2.
Segunda Epoca. Abril - Junio, 1967
